

# TRAS LAS PISTAS DE LOS DESAPARECIDOS

Marcela Turati

*Marcela Turati es una periodista que escribe desde una mirada social y con enfoque de derechos humanos. Es reportera de la revista Proceso. Es cofundadora de la Red de Periodistas de a Pie. Autora del libro Fuego Cruzado: las víctimas atrapadas en la guerra del narco (Grijalbo) y co-autora de los libros colectivos Migraciones vemos... infancias no sabemos (Ririki), La guerra por Juárez (Planeta), 72 migrantes (Almadía, frontera press), La ley del cuerno (Puntocero), Los generales (Planeta), Nuestra aparente rendición (Grijalbo) y 20 años por todas las mujeres (GIRE). Fue finalista del premio Nuevo Periodismo de la FNPI y Cemex con una serie sobre la muerte de 14 migrantes en el desierto de Arizona. Coordinó la serie sobre niños jornaleros que ganó el premio América Latina y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del PNUD y la agencia IPS. Ganó el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter por dos reportajes sobre familias que se organizan para buscar a sus familiares desaparecidos. Ha sido becaria de las fundaciones FNPI (Colombia), Avina (Brasil), Prensa y Democracia (México) y Dart Center (EU). Sus textos han aparecido en diversas antologías latinoamericanas. En 2004 y 2005 recorrió redacciones de Latinoamérica en busca de las claves para hacer un periodismo “que no se quede en la denuncia, que abra caminos de esperanza y vías para transformar la realidad”, de cuyos apuntes nació el blog Periodismo de esperanza. El presente libro, del cual es motor y coordinadora, es un intento por materializar ese periodismo que explora lo posible.*

Bajo la sombra de un frondoso árbol, en el jardín de la casa de retiros espirituales en las afueras del Distrito Federal, un grupo de madres con hijos de desaparecidos, y un par de varones, comparten sus frustradas experiencias de búsqueda y maldicen el muro de la negligencia gubernamental con el que han topado. Al reconocerse huérfanos de autoridades se abre paso una propuesta.

—Sabemos que hay cavernas, sierras, sembradíos, bodegas donde tienen secuestradas a muchas personas y aunque se da aviso a la autoridad, no hace nada. Es momento de planear un trabajo de campo para ir todos a rescatarlas.

La idea atiza las brasas de los corazones de las mujeres presentes.

—No queda de otra: las familias vamos a tener que ir bajo nuestros recursos y nuestro propio riesgo a rescatarlos, aunque los que los tienen estén armados.

Lo propone un hombre que, como todas aquí, ha seguido los rastros que los ausentes dejaron: transitó la carretera donde desaparecieron a tres de su familia con un grupo de amigos; ubicó el rancho donde sus captores los tuvieron concentrados; peinó los pueblos, cerros y brechas que están en la pasada; contactó a testigos; pidió ayuda inútilmente a procuradores, gobernantes, militares y policías; hurgó en fosas comunes de donde tomó fragmentos de huesos que, cuando tenga dinero, mandará para su análisis genético a un laboratorio. Su esfuerzo, aún sin resultados.

—Necesitamos asesoría sobre quién puede acompañarnos para llegar a esas bodegas sin arriesgarnos —sugiere entusiasmada una de las madres.

Otra señora, que lleva siempre aferrada a la solapa de su blusa, cerca de su corazón, un prendedor con la foto de su hijo —un joven que heredó sus mismas cejas tupidas— intenta devolverles la cordura:

—Si ya tenemos a un familiar desaparecido, ¿vamos a exponer a los otros? ¡Si vamos y nos desaparecen resultará peor!

—¿Qué otro pinche método de búsqueda hay? ¡No hay! —embiste el incubador de la idea.

La certeza de saberse sin salidas legales abona la lluvia de ideas. Alguna sugiere coger palas y excavar donde se dice que hay fosas clandestinas para avergonzar al gobierno y obligarlo a actuar; otra habla de convocar a todos los mexicanos de buena voluntad para ir juntos a rescatar a los muchachos; alguna más propone invitar a periodistas para armar un escándalo internacional.

Preocupada, una señora evoca el trágico destino de Leopoldo Valenzuela Escobar, Don Polo, el duranguense que sabía la

ubicación exacta del hijo secuestrado y aunque durante cuatro meses pidió ayuda para rescatarlo a las autoridades municipales y estatales, a la PGR, la Marina, la Policía Federal, el Ejército y hasta la Presidencia de la República, jamás fue escuchado. “¡Venimos por ti, compa!”, escuchó antes de morir rafagueado. La misma suerte corrió después el sonorese Nepomuceno Moreno, Don Nepo, asesinado por denunciar a los captores de su hijo.

—¿Quién de aquí no ha hecho hasta lo imposible? ¿Quién no se ha metido en la cueva del lobo? ¡Todos! —dice una mujer del grupo atajando al miedo.

Quienes recorren las rutas de la desaparición forzada en México han escuchado sobre las casas de seguridad donde la gente dice que los narcotraficantes tienen secuestradas a sus presas, los campos de cultivo donde los obligan a sembrar marihuana como esclavos, las bodegas donde los concentran como mercancía en tanto deciden su destino; las represas, tiros de mina, barriles con ácidos o terrenos baldíos donde se deshacen de los cadáveres. Saben de los centros de tortura donde el Ejército concentra a sospechosos, de los entierros clandestinos en los cuarteles militares. Pero si están aquí, en este encuentro, es porque sienten que su familiar está vivo.

Una norteña arrebatada que se ha colado a penales de alta seguridad a preguntar a sicarios por el paradero de su hijo y que a patadas se abre puertas para hacerse escuchar en oficinas de políticos —y hasta en la de la esposa del Presidente—, se imagina la acción colectiva. Y después de manosear un rato en la mente la idea de entrar en turba a una de esas guaridas de sicarios sugiere:

—¿Y si aprendemos primero tiro al blanco para de perdida defendernos cuando nos maten?

Silencio. La discusión acaba de agotarse. Saben que no aprenderán tiro al blanco ni entrarán juntos a rescatar a nadie. Aunque lo desean. Aunque rumien esa idea, en una y otra reunión, cada vez que tocan los límites de la desesperación. Como hoy. Como siempre.

### ESTRATEGIA DE GUERRA

Miles son las madres o esposas que todos los días se levantan evocando al familiar ausente. No pasa día sin que ellas se pregunten si es torturado; si comió, si “lo están aprovechando”. En los días de lluvia “¿se estará mojando?”, y a la mañana siguiente “¿amaneció enfermo?” En noches tristes las atormenta pensar en su cuerpo tirado en cualquier monte. O si el ejército lo torturó hasta la agonía o lo tiene en una cárcel clandestina. Pagan fortunas a estafadores que les prometen rescatarlos o recurren a videntes y brujas para saber cómo están. Desde que el ser amado no llegó a casa se convirtieron en nómadas. Movidas por las leyes del corazón, recorren el país peinando procuradurías, carreteras, hospitales, cárceles, morgues, cementerios, baldíos y fosas comunes. Pero no los encuentran.

Calcularlas en miles no es exagerado. Se estima que 10 mil personas han sido desaparecidas en México durante el sexenio en el que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, mandó a uniformados a cazar delincuentes en las calles y la violencia se desató como bestia asesina. El

dato —que algunos lo estiman en 6 mil y otros en 18 mil— no tiene un fundamento científico. Cualquier cifra es dada por válida por lo común de esta práctica de capturar gente y arrancarla para siempre de su propia vida, o levantarla, como se dice en el argot del narco. Y así, sin más, de un segundo a otro un veterinario deja de estar, unos hijos se quedan sin mamá. Se esfuman todos los varones de una familia, todos los pasajeros de un autobús o los sindicalizados de una paraestatal.

Porque llevarse gente, esfumarla, “levantarla”, es una estrategia de guerra.

El método no es novedoso. En la guerra sucia de los años 70 eran desaparecidos los opositores políticos, jóvenes en su mayoría. En la actual, son esfumados los varones en edad productiva y generalmente sin filiaciones políticas. No se sabe para qué. Teorías hay muchas: para engrosar los mermados ejércitos de narcos, para trabajos ilícitos forzados, para traficar con sus órganos, para aprovechamiento sexual, para sacar dinero en extorsiones, para limpiar el país de delincuentes, para dejar a la comunidad en confusión, por meterse con quien no debían, por estar en el lugar equivocado a la hora errónea o, a manera preventiva, para que no engrosen las filas de algún cártel enemigo.

Durante los primeros años del sexenio, las madres parecían una Piedad incompleta llorando en los rincones por el hijo que no pueden tener en brazos. Escondidas, porque los desaparecidos son sospechosos de su destino. Porque cada vez que acuden a la procuraduría escuchan preguntas que parecen sacadas de un mismo manual para culpabilizarlas. “Señora, ¿en qué andaba metido su hijo?... ¿No lo vio con

mucho dinero?... Seguro su esposo la dejó por otra más buena... Los que lo tienen le han de estar pagando bien así que no chille... Si denuncia se llevarán a sus otros hijos, mejor cuide a los que le quedan... Acepte estos huesos aunque no sean de él que ya otros quisieran tener un cuerpo que enterrar...”. La crueldad como método de investigación.

El 10 de mayo de 2012 cientos de Piedades marcharon juntas por las avenidas de la Ciudad de México, reclamaron a gritos los hijos robados del nido, hartas de pedir a la justicia que investigue y de surtir pistas a los fiscales. Parecían uniformadas vistiendo la camiseta y la pancarta con la foto del muchacho, de la jovencita con sus mismas facciones. Hablaban con un lenguaje hilvanado con menciones a corazones rotos, vientres vacíos, dolores del alma, caminos regados con lágrimas, vidas hechas pedazos. Lloraban hasta cuando despotricaban contra el gobierno que quiere verlas enloquecidas.

El encuentro no ocurrió ese día de las madres. Se empezó a bordar desde años antes en diferentes regiones del país, con distintas protagonistas que recorrieron los mismos laberintos burocráticos llenos de puertas falsas donde se fueron encontrando. Después de contarse unas a otras sus historias y de escucharlas una y muchas veces, concluyeron que en México la desaparición forzada es amparada por el Estado. Que los mecanismos de la impunidad garantizan que el delito siga cometiéndose. Desde entonces idean juntas estrategias para reencontrarse con los suyos. Como lo hicieron antes debajo de ese árbol y lo harán a lo largo de este capítulo.

## MAPA DE LA DESAPARICIÓN

Tijuana, Baja California, mayo de 2008. Poco a poco, afuera del terreno baldío sellado como escena del crimen, van apareciendo cruces y veladoras y familias que elevan rezos y miran hacia adentro. Es el lote donde operaba el temible “Pozolero”, el hombre que confesó haber disuelto, por instrucciones de narcotraficantes, a cientos de personas cocinadas con ácidos en tambos metálicos. Las familias, desde entonces, no dejarán de movilizarse.

Saltillo, Coahuila, diciembre de 2009. Esta tarde, en las oficinas de la diócesis, se reúnen por primera vez cuatro familias que buscan a 21 personas extraviadas en el estado. Un universitario busca a un hermano y a un sobrino; una maestra a su esposo, a su hijo de ocho años y a dos cuñados; unos hombres a los 12 vendedores mexiquenses de pintura; otro padre a dos comerciantes de oro jalisco. Los convocó Blanca Martínez, la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la diócesis encabezada por el obispo Raúl Vera, quien le pidió atender a las angustiadas familias que se le arrimaban al final de las misas.

En el encuentro, tras reconocer en los otros la misma herida y el miedo paralizante que impide denunciar, con el espíritu envalentonado deciden: “No podemos seguir callados hay que hacerlo público. Somos muchos, ¿qué más nos pueden quitar?”.

Convocan a la prensa a una conferencia, le siguen con plantones semanales afuera del Palacio de Gobierno, exponen su situación en las misas donde piden la palabra,

persiguen al gobernador en actos públicos hasta obligarlo a instalar mesas de trabajo con la fiscalía de justicia. Cuando se dan cuenta de que nada sirve y que crece el número de casos emprenden una marcha a la capital, hasta la oficina del presidente. De regreso a su tierra, náufragos de resultados, deciden fundar una organización. Se bautizan como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila; son un ejército sostenido por mamás.

“Llevaba dos años sola preguntando a las autoridades qué pasaba y nunca tenían noticias de mi hijo. Ya no tenía esperanza, no sabía qué hacer yo sola y aunque hacía lo que podía sentía que no hacía nada. Cuando encontré a las compañeras sentí esperanza, son mi familia, me comprenden y juntas hemos logrado muchas cosas”, expresa la madre del veinteañero desaparecido Israel Torres, aunque podría haber sido cualquiera.

No sólo superó la culpa, también encontró apoyo. “La que está bien está pendiente de la que está enferma, nos entendemos porque tenemos el mismo dolor”, dice al salir de una de las reuniones de la organización.

En esos encuentros ha descubierto que, después de la desaparición de un miembro, las familias se dividen, los roles cambian, la economía doméstica merma, la enfermedad hace nido. La experiencia las hace cargar un botiquín a sus reuniones. Son tantas las emociones que tocan cuando se juntan que no falta a quien le ataque la gastritis, le aumente la presión, le duela la cabeza o le suba el azúcar.

—Ya estoy desesperada. Por más que le reniego a Dios y le pregunto qué quieres de mí, ya hice todo lo que pude, ya topamos con pared... pero tú tienes la última palabra —lamenta una joven abuela a cargo de sus nietos.

—Es válido renegarle, no te sientas mal —le dice otra—. A mí Dios me dice “dame tiempo” y yo le digo “pero no tardes”.

Comienzan a mencionar citas bíblicas, como aquella que dice “busca y encontrarás”, para ellas un guiño celestial, y de ahí pasan a desentrañar otras señales y a excavar en sus sueños.

—Soñé que mi hijo me abrazaba, corría, me decía “madre” y yo me desvanecía.

—Hay que tener mucha fortaleza para que el día que regrese no se te suba el azúcar ni te dé la chiripiorca.

Ríen con el comentario.

En cada reunión encuentran nuevas pautas para el análisis. Saben, por ejemplo, que en 2009, en Coahuila, se desató un “maratón de los desaparecidos”. Que varios muchachos fueron levantados en los mismos tramos carreteros. Que hubo una racha de capturas de técnicos e ingenieros en telecomunicaciones. Que los policías municipales han sido cómplices de los secuestradores. Podrían incluso dibujar a ciegas un mapa de esos “triángulos de las Bermudas” dentro del estado.

Chihuahua, Chihuahua, noviembre de 2010. La casa de retiros espirituales en las afueras de la ciudad alberga un encuentro de mujeres. Durante la presentación, de tanto escuchar la razón por la que todas están aquí, las gargantas se hacen nudo.

El equipo organizador improvisa un ejercicio de respiración para quitar la pesadez al aire. De por sí las mujeres venidas de Nuevo León, Coahuila y Baja California habían viajado

nerviosas por saber que encontrarían a otras sobrevivientes de la misma tortura. Una anciana de plano pasó la noche en vela y amaneció con jaqueca. La mayor angustia de las mujeres es que el programa incluye, además de la charla sobre cómo exigir resultados a la justicia, impartida por veteranas de Juárez que lograron encontrar a sus hijas muertas, otra sobre la exhumación de restos.

De imaginar la posibilidad de encontrar al hijo, a la hermana o al esposo sin vida algunas entran en crisis. Varias lloran. Las personas de los distintos centros de derechos humanos las reúnen para analizar las emociones que les surgen con ese tema.

Otra incomodidad es la charla psicológica anunciada en el programa porque quienes están aquí huyeron de los psicólogos pues, en vez de ayudarlas, les dicen: “delo por muerto, confórmese con los hijos que le quedan”. Ellas no pueden más que re-cordar, que significa “traer de nuevo” (re) al “co-razón” (cordis).

La juarensis María Luisa Valdez, que busca a su hijo Juan Miguel y a un sobrino levantados en Veracruz por policías federales, explica su renuencia a las terapias: “Soy madre de siete, y todos los días me levanto y repito: me sigue faltando uno. ¿Cómo pueden pedirme descansar?”.

Pero los psicólogos que dirigen esta sesión lucen distintos. Parece que las entienden. Usan un método llamado psicossocial que se utilizó en El Salvador durante la represión de los años 80 y se convirtió en patrimonio de las víctimas de distintas violencias. Ayuda a que la gente, en comunidad, le encuentre sentido a lo que le ocurre y halle fortalezas individuales y comunes para organizarse y seguir luchando.

Así, guiados con esa técnica, los psicólogos les piden compartir las emociones que más les pesan. Ellas abren su alma:

...Me daba pena decir en el pueblo lo que me pasaba...

...Se queda uno sin trabajo, sin amigos, sin familia, como apestado, creen que siempre va uno a pedirles algo...

...Las culpas dividen a la familia, todos se recriminan...

...Se me cargó todo: tuve que sacar a mis hijos de la escuela, soy padre y madre...

...Somos como esas estrellas en el cielo, la mía es una estrella opaca que está apagada...

...El arzobispo me dijo: “tú tuviste la culpa porque no lo educaste bien”...

...Me dijeron que seguro los levantaron porque mi hijo llevaba un pantalón camuflado...

Al escucharse, las mujeres se dan cuenta que la culpa corroe, paraliza, aísla, ocupa el lugar del sinsentido. Entienden —como aquí les explican— que sus reacciones son normales ante situaciones anormales. Después de reflexionar un rato deciden que es el gobierno, y no ellas, el que debe cargarla. Acomodan sentimientos.

En la segunda fase, los psicólogos les piden que compartan sus fortalezas. Que se dibujen. Y en las hojas van apareciendo corazones heridos pero resistentes, paisajes lluviosos con arcoiris, casas sombrías de donde salen caminos delgados como víboras que indican al ausente la vía para el regreso, árboles secos que dan frutos amorosos. Al expresar comienzan a enderezarse. Los pulmones se inflan de esperanza.

“Me fortalece la vivencia de cada una, porque está pasando lo mismo y la unión hace la fuerza. Y voy a salir adelante. Ya las

de Juárez nos pusieron el ejemplo”, dice contenta la regiomontana Gloria Aguilera, que busca a su marido y dos hijos agentes de tránsito, a quienes dejó de ver el mismo día de 2009.

Ésta es la tercera reunión de madres con hijos desaparecidos en el norte. En la primera, en Saltillo, se contaron cómo la tragedia les partió la vida. En la segunda, en Monterrey, intercambiaron experiencias de lucha y detectaron que por más plantones, huelgas de hambre o mesas de trabajo logradas con los distintos gobiernos estatales y federal, la respuesta común fue la burla institucionalizada. En esta tercera, en Chihuahua, compartieron el aprendizaje legal de las veteranas, comenzaron a validar sus sentimientos y crearon la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familias de Desaparecidos del Norte.

El domingo por la tarde se despiden cantando en círculo alrededor de un cirio pascual encendido como símbolo de esperanza. Arropadas en una lluvia de abrazos unas a otras se dicen al oído la misma frase: no te rindas.

Monterrey, Nuevo León, Mayo de 2011. El calor seco pega intenso sobre las escalinatas afuera de la Procuraduría de Justicia del estado, donde se plantan decenas de familias uniformadas con camisetas blancas en las que llevan impresas los rostros de los seres queridos y la pregunta “¿dónde están?”.

Adentro, en la oficina del procurador, 13 familias en representación del resto exhiben un cuadro sinóptico que muestra las sistemáticas omisiones de la dependencia en las pesquisas. Son las pistas sin rastrear. Las placas de la camioneta en la que se llevaron al ausente, el video que muestra quiénes lo sacan a

la fuerza, el relato del testigo, la lista de llamadas hechas desde su celular después de capturarlo, las coordenadas que marca el GPS de donde fue levantado, el mensaje de texto que la víctima alcanzó a mandar avisando quiénes o dónde lo tenían retenido.

Escuchándolas queda claro que a los desaparecidos no se los lleva el viento. No se los traga la tierra. No desaparecen de la nada. No son personas a quienes alcanzó un brote contagioso de Alzheimer y olvidan el camino a casa. Alguien se los lleva y ellos generalmente dejan pistas. Pero quienes están obligados a investigarlas no lo hacen.

Está ahí Gloria Aguilera, pidiendo respuestas por su esposo Julián Urbina Torres y sus hijos Julián Edwin y Geovanny, los agentes de tránsito desaparecidos el mismo día. Durante semanas quedó noqueada en cama, sin deseos de contestar el teléfono hasta que sintió que su misión era buscarlos. En eso ha andado de la mano de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), centro dirigido por la religiosa Consuelo Morales, y de sus compañeras, muchas como ella, madres y esposas de policías o, por el contrario, de víctimas desaparecidas por policías.

“Vinimos a puntualizar lo que se debió haber investigado y no se hizo. En mi caso dije en la procuraduría dónde podían buscarlos porque mi esposo me contaba cosas de su trabajo y hasta dos años después dizque fueron a buscarlos y, claro, ya no encontraron a nadie. Anexé al expediente el recibo del teléfono de uno de mis hijos con las llamadas que siguieron haciendo, pero no las investigaron. Un día me atreví a llamar a uno de los números y sí me contestaron, pero ya no intenté más, pasé todo a la procuraduría”, relata la mujer menudita, de gesto dulce que ha participado lo

mismo en huelgas de hambre, que en encuentros con otras madres en Chihuahua, donde se prometieron no claudicar.

Esta mañana, cuando salió hacia la procuraduría marchando con sus compañeras, Gloria estaba nerviosa pero esperanzada de que echando montón podrían movilizar a los agentes. Platicaba que, aunque se promete no llorar en público al dar su testimonio, siempre la traiciona el dolor. Ahora, cuatro horas después, al salir de la oficina del procurador, luce triste. De camino a Cadhac, encogida de hombros comenta: “nos pidieron que les demos un mes más para que empiecen a buscarlos”.

En las oficinas de la organización realizan un convivio para informarse de lo ocurrido. La mayoría luce tranquila, en cambio, Julia —la compañera que busca a un hijo capturado por policías desde 2009— habla a gritos por teléfono en un monólogo interminable: “¡dígame al señor procurador que no se burle, que me diga qué han hecho, que mejor me diga que nada!... ¡Nomás están aparentando! ¿Para eso le pagan al señor que nos atendió?... ¡Tres años y siete meses y ni siquiera ha leído el expediente!... ¿Cree que soy estúpida? Ya me cansé, ¡tres años y siete meses suplicándole por favor, por favor, pero nomás se burlan! ¡Me le voy a hacer una huelga de hambre hasta que me muera, hasta que me muera!”.

Cuelga con rabia. Trata de balbucear algo pero no puede. Sólo atina a encogerse en un sillón para llorar. La hermana Consuelo se sienta a su lado, la abraza, la acaricia como a una hija, le dice que aprenda a no ir sola a las reuniones, pues todas están para acompañarse, que se tranquilice, que seguirán buscando a su hijo, que no descansarán hasta sacar a todos de donde los tienen.

México DF, Julio 2011. En el salón de reuniones de la organización donde acamparán esta noche se ven caras largas, ojos tristes. Decenas de familias del interior del país habían viajado ilusionadas a la reunión para hablar con el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y con la procuradora general de la República, Marisela Morales, a quienes plantearían siete reclamos. Pero todo se salió de control.

“Al menos no nos batearon”, intenta matizar un joven de Coahuila, mientras varios se reclaman por el fracaso de la reunión. Unas víctimas que nunca habían hablado ante autoridades comenzaron a exponer sus historias y el secretario, astuto, pidió que otras contaran sus tragedias, mientras los demás notaban angustiados que la cita llegaba a su fin. Fue cuando algunas, desesperadas, intervinieron para contar sus casos. Apenas pudieron centrarse en plantearle la necesidad de crear una fiscalía nacional dedicada a buscar personas, un banco de datos genético de las familias, una base de información nacional de casos y un programa de búsqueda con protocolos establecidos.

La discusión continúa:

—Qué decepción. Hasta se me subió el azúcar —dice una norteña sentada en un rincón, el cansancio en el rostro.

—No nos fue tan mal, logramos evidenciar que no han hecho nada —responde un abogado.

—¿Por qué esta vez no lo hicimos bien, como cuando los de la ONU vinieron a vernos? Si cada quien está hablando sin método nos van a ganar el partido porque los políticos sólo quieren aprovecharse —repela el universitario.

Las recriminaciones continúan. Una mujer pide disculpas. Algunas se incomodan por los reclamos. La desesperación

cunde al ver desvanecerse otro oasis en este largo peregrinar por los áridos caminos de la búsqueda de un ser querido.

—Con tantas puertas que nos están cerrando vamos a tener que hacer lo que proponen las compañeras de Sonora, que dicen que las están obligando a agarrar una pala y salir al momento a buscarlos. ¿Qué les cuesta a ellos buscarlos si ya todos sabemos dónde los desaparecen? —señala impaciente una mujer.

—Pero es bien riesgoso. Tenemos que pensar bien, no nada más que salgamos en la locura del dolor al monte. Tenemos que organizarnos mejor —intenta tranquilizarlos una asesora.

Otra vez toparon con pared. No será su última decepción en este juego de serpientes y escaleras. Después el secretario Blake y el subsecretario Felipe Zamora, que habían prometido ayudarlas, morirían en un accidente aéreo. Luego se enterarían por las noticias de que el hermano del fiscal de justicia de Coahuila, Jesús Torres Charles y la subdelegada de la PGR, Claudia González López, a quienes confiaron las investigaciones, estaban en la nómina de uno de los cárteles de la droga.

León, Guanajuato, Mayo de 2012. De los autobuses recién llegados bajan madres nortañas que viajan con destino al DF, donde anticelebrarán en un plantón otro 10 de mayo alejadas de sus hijos.

En la desarropada marcha rumbo al centro de la ciudad, en la que participan pocos ciudadanos, Ángeles López, activista del centro de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, vocifera por el altavoz: “hay una política de desaparición forzada, una política apoyada por el Estado... El Es-

tado apoya las desapariciones cada vez que no los buscan, cada que nosotros denunciemos los retenes o los puntos en las carreteras donde desaparecen y no hace nada; cuando no combate al crimen organizado; cuando no investiga las denuncias; cuando niegan que el delito exista; cuando no quieren darnos información... Hoy fueron nuestros hijos, mañana pueden ser otros”.

La idea de armar la caravana desde Ciudad Juárez hasta la capital del país surgió tras la presentación del informe que hizo la ONU sobre la desaparición forzada en México que validó los reclamos de las familias. “¿Qué más podemos hacer?”, se preguntaron al final, “si ya nos sentamos frente al presidente Calderón, si ya nos crearon una fiscalía para buscarlos, si ya logramos que cambiaran las leyes, si ya la ONU nos dio la razón. ¿Qué más?”. “¿Y si hacemos un plantón el día de las madres?”, sugirió alguna, y entonces dale, ponte a vender ropa usada en la cochera de la casa, a ofrecer comida los domingos afuera de misa, a confeccionar manualidades y organizar rifas para juntar para el viaje.

Las de Chihuahua, organizadas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem) y Justicia para Nuestras Hijas, llenaron un camión con mujeres de todas las generaciones: abuelas que hace 15 años buscan a sus hijas comparten asiento con hermanas, esposas y nietas de personas (mujeres, la mayoría) desaparecidas. Antes de subirse asistieron a un taller donde mesuraron sus expectativas para no deprimirse como cada vez que, después de una manifestación, no encuentran respuesta. En Saltillo y Torreón las madres hicieron ceremonias de envío a las compañeras que representarían al resto. Les impusieron las manos. Cada una

tomó una varita de trigo, frágil y quebradiza, la unió con las demás para simbolizar que juntas son más fuertes, indomables. En esta escala, mientras se desentumen y esperan el desayuno, una trabajadora social les pide cerrar los ojos, tomar aire y abrazar con el corazón al ser querido. Entonces comienzan a escucharse los suspiros entrecortados. Algunas madres mueven los labios. Están platicando con sus hijos. ¿Cuántos ausentes estarán presentes en esta vieja fábrica sin techo? Si Doña Emma, la anciana sentada en la silla, perdió a ocho, toda la simiente masculina de su familia. Si las gemelas Alvarado perdieron a su mamá y a sus tíos. ¿Cuántos desaparecidos están siendo abrazados, si estas mujeres representan a otras muchas?

#### MECANISMOS DE IMPUNIDAD

Junto al pizarrón del salón en el Distrito Federal donde se lleva a cabo un nuevo encuentro está una República Mexicana mal dibujada. Tiene marcados los hoyos negros en donde se llevan a la gente. El mapa de la desaparición forzada se desplaza por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Querétaro, DF o Morelos. Y sigue abriendo huecos.

Las mujeres y el puñado de hombres reunidos han aprendido a lidiar con el dolor de la ausencia y la incertidumbre. Diseñaron sus propias estrategias de afrontamiento. Entraron a un proceso colectivo de búsqueda. Crearon redes de apoyo mutuo. Saben que la desaparición forzada es un fenómeno na-

cional, con lógica propia y un Estado cómplice de los captores, ya sea por omisión, colaboración o como perpetrador.

“Cuando conocí a la organización me involucré de lleno, era la posibilidad de hacer algo. Supe que lo de mi hijo no era un secuestro sino una desaparición, pero ya no podía recuperar el tiempo perdido de haber estado sólo llorando. En este tiempo he crecido”, comparte la saltillense Diana Iris, madre de Daniel Cantú, a quien busca desde hace media década.

Hace cinco años, al dar su primera entrevista, Diana pidió que grabaran sólo sus manos y distorsionaran su voz, pero hoy, vencido el miedo, es la primera en tomar el micrófono durante las manifestaciones, aunque siempre termina llorando. Su activismo le valió el divorcio. Al hablar con su marido de los términos de la separación le hizo una única petición: “si yo llego a faltar, tú continúas la búsqueda de nuestro Daniel”.

Volcada a la organización, ayuda a las otras mujeres que llegan a pedir ayuda. Como las demás, de madre se transformó en defensora de derechos humanos. Como las demás, experimenta una maternidad colectiva. “Si Daniel ya no tiene vida quiero que mi vida valga la pena para encontrar a los de mis compañeras”.

Las distintas organizaciones de derechos humanos que las acompañan les han dado herramientas para —como dice alguna por aquí— “saltar del ‘pobrecitas que somos’, al ‘somos poseedoras de derechos y al mismo tiempo que lloramos sabemos exigirlos’”. Toman nota de las experiencias de lucha de las madres de Colombia, de Guatemala, de Argentina, o las doñas mexicanas de Eureka. Sus maestras, sus ancestras, sus hermanas.

En el encuentro, el psicólogo vasco que viaja por el mundo exportando el método psicossocial, les habla de la importan-

cia de salir de la confusión que pretenden imponerles quienes quieren inmovilizarlas.

“Ésta es una lucha contra la impotencia, todo está puesto para ponernos obstáculos. La búsqueda está llena de puertas que llevan a ningún sitio, como un laberinto. Porque el problema de la desaparición es que parece que no hay responsable, que no se sabe quién fue, por qué, o cómo. Pero los familiares tienen que ser conscientes de que forma parte de una estrategia de estigmatización, de culpabilización, de aislamiento social, de privatización del daño, en el que todos te hacen sentir culpable y tenemos que ver cómo protegernos de eso”, explica al grupo.

“Por eso”, continúa, “construimos las vivencias colectivas, aprovechamos la experiencia de todos porque, al comprender el fenómeno de la desaparición salimos del caso individual y empezamos a tener una reflexión colectiva que nos ayude a enfrentarlo, a salir de la parálisis”.

Sienten alivio con estas palabras. Reconocen que si se han sentido enloquecidas, si la gente las evita como si estuvieran apestadas o si las investigaciones no avanzan, tiene relación con las estrategias aplicadas por el Estado para mantenerlas en la confusión. Forma parte de los mecanismos de la impunidad.

Esto hace recordar a Claudia, la madre de un policía desaparecido, el momento en el que las autoridades la llevaron sola a ver una exhumación (“ya no sabía si quería seguir, pero ahí estaba”). A Rosa, mamá de una adolescente asesinada, cuando la obligaron a recibir huesos que no eran de su hija (“que por cuestiones de salubridad no podía verla”). A Lupita cuando lloró en el hombro de la funcionaria que resultó tra-

bajar para los narcos (“tengo asco, se burlaron de nosotras”). A Roberta, cuando no le quisieron entregar el cuerpo de su hijo aún dos meses después de hallado (“les pregunté que de qué les servía, que para ellos eran huesos, para mí mi hijo”).

Así, cada una va desenmascarando las estrategias del Estado:

...Te hacen sentir que te hacen un favor, cuando es un derecho...

...Abren varios expedientes de un mismo caso para cansarnos y confundirnos...

...Me dijeron ‘señora, no lo busque, se lo tragó la tierra’...

...Enfrentan a las familias y meten ideas contra sus asesores...

...A todo lo que pedimos dicen que sí, pero en la práctica lo niegan...

...Desaparecen expedientes...

...Llevan a la gente solita a las excavaciones sin prepararlas y a la mitad las suspenden; son crueles...

...Que no tienes derecho de abrir el ataúd ni para despedirte del cuerpo de tu hija, y te quedas con la duda de si a ella fue a la que enterraste o si sigue viva...

...Te intimidan por investigar, dicen que van a acusarnos por usurpación de funciones...

...Su estrategia no sólo es la desaparición, también es la negación de la justicia...

...Son expertos en envolverte y en no hacer nada. Nomás se hacen pendejos...

Escritas sus experiencias en el pizarrón, toma forma, tamaño y cuerpo el monstruo que enfrentan. De momento se esfuma esa sensación de estar a ciegas.

“Así va a ser más difícil que nos quieran hacer tontas”, festeja alguna.

Seis meses después, la próxima vez que las madres y las organizaciones se encuentren de nuevo en el Distrito Federal para analizar el camino andado y los retos que se avecinan con el fin del sexenio, dejarán el pizarrón lleno de frases cortas. Son palabras que no representan el tamaño de los logros que van enunciando en voz alta cuando, una por una, dice lo que cambió los últimos meses:

“Aprendimos a manifestarnos sin miedo”.

“Dejamos de ser invisibles”.

“Los periodistas ya nos hacen caso”.

“Logramos traer a la ONU”.

“Nos invitaron a hablar en el extranjero”.

“La gente ya no habla de levantados, habla de desaparecidos”.

“Marchamos juntas el 10 de mayo”.

“Cada mes nos reunimos con la procuraduría para ver el avance de 50 casos”.

“Creamos una ley de víctimas que el presidente vetó, pero seguimos peleando”.

“Se hizo un protocolo para que el Ministerio Público sepa qué hacer las primeras horas cuando recibe denuncias”.

“Conocemos los métodos que usa el Estado para confundirnos”.

“En Chihuahua se rescataron cinco jóvenes vivas y una en Veracruz”.

“Estamos aquí familias y organizaciones de varios estados, organizándonos”.

“Cuando las autoridades ven que llegamos se ponen a trabajar”.

“Ya representamos a otras víctimas”.

Al final, una de las compañeras toma la palabra y expresa su sensación de ambivalencia: “Aunque éstos son logros no significan resultados, porque aún no hemos recuperado a nuestros hijos”.

Sin embargo, se les nota transformadas. Están revestidas de una dignidad que nadie les quita. Una madre no aguanta las ganas de pasar al frente a leer la carta de amor que escribió para su hijo y las demás la acompañan con su llanto. No falta quien cierre los ojos e imagine que el reencuentro puede ser más rápido y sueñe con el día en que podrán entrar a las casas de seguridad, las bodegas, las cuevas, los sembradíos, las cárceles donde tienen esclavizados a los suyos, y rescatarlos.

\*Los nombres de algunas personas que aparecen en esta historia fueron cambiados a petición de ellas mismas.